

El PP presenta mociones en todos los ayuntamientos para exigir un plan de choque en defensa del campo español

- **La vicesecretaria de Desarrollo Sostenible, Paloma Martín, registra en la localidad sevillana de Lora del Río la primera iniciativa**
- **Exige al Gobierno “soluciones inmediatas” que den respuestas reales a los problemas del sector primario**

13 de enero de 2024.- El PP extenderá la petición del plan de choque en defensa del campo, con una batería de 15 medidas urgentes, en todos los ayuntamientos españoles. La vicesecretaria de Desarrollo Sostenible, Paloma Martín, ha presentado hoy en la localidad sevillana de Lora del Río la primera de las mociones, a la que seguirán otros municipios de todas las comunidades autónomas. Esta acción se acompaña con la presentación de proposiciones no de ley (PNL) en los parlamentos regionales.

Paloma Martín ha mostrado en la presentación de la moción “el apoyo incondicional” a los agricultores y ganaderos españoles. A través de estas iniciativas, se exige al Gobierno español “la inmediata respuesta y soluciones” a los problemas que vive el campo.

Entre las 15 medidas que conforman el plan de choque, se exige el compromiso de no imponer nuevos impuestos, la flexibilización de la burocracia de la PAC, la reducción del IVA de productos esenciales como la carne y las conservas, o la suspensión del impuesto al plástico, que lastra la competitividad del sector primario español.

Estas peticiones, que se materializan en forma de moción en los ayuntamientos, fueron consensuadas por todos los consejeros autonómicos de Agricultura donde gobierna el PP. Paloma Martín ha manifestado que “escuchamos, comprendemos y apoyamos” a los agricultores y ganaderos españoles, que continúan sus movilizaciones por todo el territorio para pedir soluciones urgentes.

SECTOR ESTRATÉGICO

El PP ha manifestado en diversas ocasiones el carácter estratégico del sistema agroalimentario español y por ello plantea este plan de choque que abarca medidas “inmediatas” de distintos ámbitos.

Entre las acciones destacan las relativas a garantizar la producción de alimento y reforzar su imagen, las referentes a los costes de producción o una fiscalidad diferenciada para hacer más accesibles ciertos productos. Se exigen soluciones que proporcionen seguridad jurídica y garantías de funcionamiento del sector, como la disponibilidad de recursos hídricos o la revisión del sistema de seguros agrarios.

Así mismo se propone la revisión de aquellas actuaciones que puedan suponer un lastre para la competitividad, como la implantación de impuestos y el análisis del impacto de nuevas normativas, las que supongan competencia desleal para los productos españoles, las medidas de carácter económico para mejorar la financiación y desarrollo de proyectos, la reducción de carga burocrática y la flexibilización de la Política Agraria Común.